

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia  
JUZGADO : 16° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-5318-2019  
CARATULADO : ROJAS/MANAUD

Santiago, veintiseis de Mayo de dos mil veinte.

**Vistos.**

Con fecha 12 de febrero de 2019 comparece doña María Alejandra Arrianza Donoso, abogada, domiciliada en San Antonio 378 oficina 1002, comuna de Santiago, en representación de doña **Mariana Andrea Rojas Arqueros**, estudiante, domiciliada en calle Libertad N°1473, departamento 310, comuna de Santiago, don **José Claudio Hernán Díaz Riveros**, capataz, domiciliado en Villa don Mateo I, pasaje Caridad 3108, comuna de Rancagua, don **Eduardo Enrique Díaz Maureira**, viverista, domiciliado en La Esperanza 75, nuevo Buin, comuna de Buin, don **Carlos Segundo Rojas Villagrán**, pensionado, domiciliado en Gilberto Pelegrini 1185, población Maestranza, ciudad de Coquimbo, don **Alejandro Felipe Fabres Fabres**, sacerdote, domiciliado en calle Lago Rupanco 3500, población Magallanes, comuna de Pedro Aguirre Cerda y doña **Ingrid del Carmen Telias Flores**, pensionada, domiciliada en calle El Canelo 725, población Orval, ciudad de Limache, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, Santiago.

Con fecha 24 de abril de 2019, el demandado contestó la demanda.

Con fecha 30 de mayo de 2019, el demandante evacuó la réplica.

Con fecha 24 de junio de 2019, el demandado evacuó la dúplica

Con fecha 26 de junio de 2019, se recibió la causa a prueba.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 17 de marzo de 2020, se citó a las partes a oír sentencia.

### **Considerando**

**Primero.** Que comparece doña María Alejandra Arrianza Donoso, en representación de doña Mariana Andrea Rojas Arqueros, don José Claudio Hernán Díaz Riveros, don Eduardo Enrique Díaz Maureira, don Carlos Segundo Rojas Villagrán, don Alejandro Felipe Fabres Fabres y doña Ingrid del Carmen Telias Flores, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizados, fundados en las razones de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Funda su demanda en los hechos acaecidos a sus representados, los cuales fueron reconocidos por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech). Estos hechos se vinculan en todos los representados por el lugar de su comisión y en ciertos casos por los perpetradores, sin perjuicio de ello, los relata individualmente.

### **Alejandro Felipe Fabres Fabres (Registro N°2892):**

Señala que fue detenido el 16 de octubre de 1986, con sólo 16 años, en el contexto de una manifestación estudiantil, ingresándolo a la 34° Comisaría de Santiago y ocultando dicha información a sus familiares.

Agrega que la noche de su detención fue dirigido a un lugar desconocido donde lo sometieron a un interrogatorio al tenor de insultos, golpes de puño y paños mojados con que golpeaban su espalda. Al día siguiente fue trasladado a la cárcel de menores de Puente Alto, donde se le informó que de no entregar información, los reos se encargarían de golpearlo y violarlo muchas veces.

Finalmente fue puesto a disposición de la Tercera Fiscalía Militar donde lo hicieron firmar un documento que señalaba no haber sido sometido a malos tratos físicos ni psicológicos, al momento que le apaleaban la espalda.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que actualmente atraviesa cuadros depresivos y padece dolores crónicos de espalda.

**Carlos Segundo Rojas Villagrán (Registro N°21452) y Mariana Rojas Arqueros (Registro N°7551):**

Expresa que Carlos fue detenido el 18 de octubre de 1984 por civiles, militares y carabineros mientras allanaban su casa ubicada en Neptuno 397, comuna de Lo Prado, buscando armas que supuestamente habría escondido y destruyendo gran parte de mobiliario. El actor fue golpeado con la culata de una metralleta en sus costillas y fue obligado a permanecer boca abajo junto a uno de sus hijos, recibiendo golpes cada vez que levantaba la cabeza.

Posteriormente, Pablo Ugalde, dirigente del operativo, cogió dos botellas de plástico y las identificó como artefactos explosivos, exigiendo que se le informase de los detonadores, bajo amenaza de violar a todas las mujeres de la casa, comenzando por Mariana Rojas Arqueros de 13 años de edad, a quien amenazó directamente al momento que destruía su ropa.

Señala que parte de su familia fue trasladada a la 26° Comisaría de Santiago, donde les vendaron los ojos, les propinaron golpes de puño, patadas y corriente en los genitales, anos y otras partes sensibles del cuerpo, obligando a la mujer de Carlos, doña Susana Arqueros, a contemplar la escena mientras la apuntaban con una metralleta y la amenazaban con matar a todos y violar a su hija más pequeña.

Agrega que los mantuvieron 8 días incomunicados y sometidos a torturas. Con posterioridad la mujer de Carlos fue trasladada a la cárcel de mujeres y él a la cárcel pública por aproximadamente 9 meses.

Añade que esa noche, su hija Mariana de 13 años de edad, quedó en casa junto a su sobrino pequeño y su hermano, mientras un hombre los interrogaba, obligándolos a permanecer quietos sin siquiera poder ir al baño, mientras seguía destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Una vez que los agentes se marcharon, Mariana recibió ayuda de una monja. Su



«RIT»

Foja: 1

hermano pequeño permaneció meses sin hablar y ella temiendo que Ugalde volviera a casa y la violara.

Arguye que actualmente don Carlos presenta problemas en uno de sus brazos y los recuerdos le causan mucho daño e impotencia, agregando que su mujer nunca recibió reparación por todo el daño infringido. Asimismo, Mariana ha debido vivir con los recuerdos de dicha noche.

**Eduardo Enrique Díaz Maureira (Registro N°304):**

Señala que fue detenido el 13 de diciembre de 1973, con sólo 16 años de edad, y conducido al Cuartel General de Investigaciones, donde vendaron sus ojos y comenzaron a golpearlo con puños y patadas, mientras lo interrogaban, situación que se repitió a los tres días, sumando alrededor de 20 días de privación de libertad.

Agrega que presenta secuelas de las torturas como la nariz quebrada y un testículo deforme. Actualmente asiste a terapia psicológica grupal.

**Ingrid del Carmen Telias Flores (Registro N°24097):**

Señala que fue detenida el 27 de julio de 1975 por el Servicio de Inteligencia de Carabineros, siendo conducida a las dependencias del diario El Clarín, donde fue sometida a interrogatorios y golpes de corriente en sus genitales, dedo (sobre el anillo) y muñeca (sobre el reloj).

Posteriormente fue amarrada a una silla dentro de una habitación fría, con los ojos vendados y sin alimento. En los días siguientes continuaron infringiéndole torturas para luego trasladarla a Cuatro Álamos, donde le aplicaron torturas tales como simulacros de fusilamiento, golpes y aplicación de electricidad sobre un catre a cuerpo desnudo y mojado.

Finalmente fue trasladada en un camión con los ojos vendado y junto a otros prisioneros. Luego los bajaron y les dijeron que serían fusilados, oyó el ruido de las armas preparándose y rato después el ruido del camión alejándose. Actualmente atraviesa cuadros depresivos y teme salir a la calle.

**José Claudio Hernán Díaz Rivero (Registro N°2579):**



«RIT»

Foja: 1

Señala que fue detenido el año 1982, y trasladado a la cárcel de Rancagua, acusado de extraer material explosivo de la empresa en la cual trabajaba a fin de realizar un atentado terrorista. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Linares y al Regimiento Escuela de Artillería de Linares, donde fue sometido a violentos interrogatorios para, finalmente, vendarle los ojos, engrillarlo y llevarlo a un picadero donde fue sometido a golpes de puño, pies y con elementos contundentes como palos y correas, además de amenazarlo con aplicarles las mismas torturas a sus familiares, perdiendo el conocimiento varias veces.

Agrega que estando privado de libertad fue sometido a torturas constantes, sin dejarlo dormir o descansar, lo que le hizo perder la noción del tiempo. Posteriormente fue devuelto a la cárcel de Linares donde estuvo incomunicado durante cinco días, donde fue ayudado por los abogados del obispado, y tras seis meses fue dejado en libertad bajo firma.

Agrega que con fecha 2 de julio de 1984, en la Causa Rol 184-83 del Tercer Juzgado Militar, fue finalmente sobreseído, lo que fue confirmado por la Corte Marcial el año 1990.

Avalúa el daño moral en \$100.000.000.- de pesos por cada uno de los demandantes atendido los hechos descritos y las consecuencias que ello generó en sus vidas, siendo cada uno de ellos sometido a una tortura psicológica que le provocaran los recuerdos, provocando pesadillas, insomnio, angustia, entre otros.

### **Respecto del Derecho**

Señala que de los hechos narrados tiene responsabilidad civil el Estado de Chile, ya que los autores eran miembros del Ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o Civiles, revestidos de autoridad pública.

Refiere a que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en los hechos ilícitos ocurridos a través de diferentes actos de instrumentos jurídicos como el Informe sobre Prisión Política y Tortura, siendo responsable del daño moral causado.



«RIT»

Foja: 1

Continúan sus argumentaciones en materia de imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria, en virtud de que el Estado no puede aplicar normas del Código Civil por ser la responsabilidad del Estado un problema de derecho público.

En razón del Derecho Internacional de los Derechos Humanos invoca la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Reitera que según lo expuesto, ha quedado de manifiesto que no procede en la especie aplicar normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por Delitos de Lesa Humanidad. En este sentido reclama que la acción de marras, al estar dirigida a buscar la responsabilidad del Estado por delito de lesa humanidad, debe ser considerada imprescriptible.

Añade que concurren los requisitos para indemnizar, a saber: acción u omisión del agente, daño, nexo causal y no concurrente de exención de responsabilidad.

Previas citas legales, solicitan tener por deducida demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizados, y condenarlo a título de indemnización de perjuicios por daño moral al pago de la suma de \$100.000.000 a cada uno de los demandantes, más reajustes, intereses y costas.

**Segundo.** Que comparece la abogada Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, al contestar la demanda principal, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone a continuación.

Opone en primer lugar la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizado el demandante.

**Reparaciones mediante transferencia directa de dinero y pensiones.**



«RIT»

Foja: 1

En tal sentido manifiesta que las indemnizaciones que el demandante solicita se desenvuelven en el marco de las infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transicional, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. En efecto, la Ley Nro. 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mediante reparaciones mediante transferencias directas de dinero, mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y reparaciones simbólicas, lo que permite que numerosas víctimas obtengan una reparación monetaria. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos, haciéndose referencia en la discusión de dicha ley incluso al objeto indemnizatorio de reparación moral y patrimonial de aquella.

Hace presente que a diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de \$706.387.596.727.-, por concepto de reparaciones de daño moral ocasionado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Agrega que estas pensiones han sido una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, además de la indicada pensión, la Ley 19.123 consagra además transferencias directas de dinero que se han creado con idénticos fines reparatorios.

### **Reparaciones específicas.**

Expresa que el demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes números 19.234 y 19.992 y sus modificaciones.

Indica en primer término que la ley 19.992 (y sus modificaciones) estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, todos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Agrega que así, se estableció para quienes figuraran en dicha nómina una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de



«RIT»

Foja: 1

\$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Consigna adicionalmente, se concedió a los beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Precisa que el PRAIS cuenta con un equipo compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Menciona que también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, junto con beneficios en vivienda, correspondiente al acceso a subsidios para vivienda.

### **Reparaciones simbólicas.**

Expone que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor – siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino que precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. En este sentido refiere una serie de reparaciones de carácter simbólico en las que ha incurrido el Estado (Memorial del Cementerio General, establecimiento del Día del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros).

**La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.**





«RIT»

Foja: 1

De lo expresado anteriormente concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera del Estado que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Así las cosas, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, exigirse nuevas reparaciones. Cita jurisprudencia de nuestro Tribunales Superiores de Justicia en apoyo de su posición.

**En subsidio opone excepción de prescripción extintiva.**

En subsidio opone la prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducidas en este proceso civil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código. Solicita que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.

Esgrime que conforme al relato efectuado por los demandantes, as detenciones, privaciones de libertad y torturas se produjeron en un lapso de tiempo que va entre noviembre de 1974 y octubre de 1975.

Razona expresando que incluso entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 15 de junio de 2018, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil, por lo que opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en la norma recién citada.



«RIT»

Foja: 1

Señala que en subsidio de la excepción de prescripción recientemente referida, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción indemnizatoria, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Refiere finalmente sobre la alegación de los demandantes en cuanto a la imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria de autos, indica que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe, no es factible, a su juicio, apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Cita variada jurisprudencia al respecto.

### **Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria**

Que en la especie se han ejercido acciones de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que las acciones impetradas pertenecen -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

Agrega que en base a normas contenidas en el Derecho Internacional, que no hay norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar

### **En cuanto al daño e indemnización reclamada.**

Interpone en subsidio de las defensas y excepciones reproducidas anteriormente, las siguientes alegaciones respecto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.



«RIT»

Foja: 1

Refiere que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino que sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Enfatiza en que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberán ser justificadas íntegramente.

**En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.**

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad era precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

#### **Improcedencia del pago de reajustes e intereses.**

Finaliza su contestación señalando que no procede el cobro de reajustes e intereses, en el caso de que la sentencia que se dicte en autos acoja la demanda y establezca esa obligación, solicitando que de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

En razón de lo expuesto previamente, pide tener por contestada la demanda y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones



«RIT»

Foja: 1

opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

**Tercero.** Que al evacuar la réplica, la parte demandante, vino a expresar lo siguiente.

**En cuanto a los hechos,** no han sido discutidos.

**En cuanto a la excepción de reparación integral,** indica que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley N° 19.123 no es óbice ni inconveniente alguno para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un tribunal de la República, por lo que la excepción de pago opuesta por el Fisco resulta inconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno sólo es aplicable cuando no contradice al Derecho Internacional.

Concluye y reitera en atención a lo expresado en el párrafo anterior, que el régimen de pensiones asistenciales invocado por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

**En cuanto a la excepción de prescripción** expone que la Excm. Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el



«RIT»

Foja: 1

derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito.

Agrega que en razón de lo reseñado en el párrafo anterior, cualquier intención de diferenciar la acción civil y penal en materia de derechos humanos resulta discriminatoria al otorgar un tratamiento desigual, no permitiendo al ordenamiento jurídico guardar la debida coherencia y unidad que se le reclama.

**En cuanto al monto de la indemnización,** manifiesta que los montos demandados están totalmente ajustados a la justicia, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad, que demostrará oportunamente en el término probatorio, acreditando las consecuencias dañosas de los aciagos hechos narrados para la salud mental de sus mandantes. Agrega que debe ser el tribunal quien determine el monto del daño moral y desde cuando se aplican los reajustes e intereses.

**Respecto a los reajustes e intereses,** indica que los reajustes e intereses demandados están conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensando en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización, sin perjuicio de ser el tribunal el soberano para fijar el momento desde el cual se reajusta y devengan intereses los montos fijados como indemnización.

**Cuarto.** Que al evacuar el trámite de duplica la parte demandada reitera los fundamentos de hecho y de derecho de su contestación fiscal, especialmente en cuanto a la excepción de prescripción y la excepción de pago, señalando que los demandantes han sido indemnizado con los siguientes monto:

- Mariana Andrea Rojas Arqueros \$16.062.148.- pesos;
- José Claudio Hernán Díaz Riveros \$16.062.148.- pesos;
- Eduardo Enrique Díaz Maureira \$25.947.141.- pesos;
- Carlos Segundo Rojas Villagrán \$27.542.774.- pesos;
- Alejandro Felipe Fabres Fabres \$16.062.148.- pesos, y;



«RIT»

Foja: 1

- Ingrid del Carmen Telias Flores \$26.511.226.- pesos.

**Quinto.** Que, con fecha 26 de junio de 2019, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que allí se señalaron.

**Sexto.** Que a fin de acreditar sus dichos, la parte demandante rindió prueba instrumental, acompañando los siguientes documentos:

- 1- Copia simple de certificado de víctima de prisión política y tortura de **Alejandro Felipe Fabres Fabres**, suscrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;
- 2- Copia simple de certificado de víctima de prisión política y tortura de **Mariana Rojas Arquero**, suscrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;
- 3- Copia simple de certificado de víctima de prisión política y tortura de **Carlos Segundo Rojas Villagrán**, suscrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;
- 4- Copia simple de certificado de víctima de prisión política y tortura de don **José Claudio Díaz Riveros** suscrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;
- 5- Copia simple de certificado de víctima de prisión política y tortura de don **Eduardo Díaz Maureira** suscrita por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;
- 6- Copia simple de certificado de víctima de prisión política y tortura de doña **Ingrid del Carmen Telias Flores** suscrito por el Instituto Nacional de Derechos Humanos;
- 7- Copia simple de carpeta de ingreso, antecedentes y calificación de víctima de prisión política y tortura de Carlos Segundo Rojas Villagrán;
- 8- Copia simple de carpeta de ingreso, antecedentes y calificación de víctima de prisión política y tortura de don Jose Claudio Diaz Riveros;



- 9- Copia simple de carpeta de ingreso, antecedentes y calificación de víctima de prisión política y tortura de don Eduardo Diaz Maureira;
- 10- Copia simple de carpeta de ingreso, antecedentes y calificación de víctima de prisión política y tortura de la Comisión Valech de doña Ingrid del Carmen Telias Flores;
- 11- Copia simple de carpeta de ingreso, antecedentes y calificación de víctima de prisión política y tortura de la Comisión Valech de don Alejandro Felipe Fabres Fabres;
- 12- Copia simple de carpeta de ingreso, antecedentes y calificación de víctima de prisión política y tortura de la comisión Valech de doña Mariana Andrea Rojas Arqueros;
- 13- Copia simple de certificado de la doctora Libania Paz Melgar, de fecha 4 de junio de 2019;
- 14- Copia simple de evaluación psicológica, informe de daño de doña Ingrid del Carmen Telias Flores de fecha 12 de julio de 2019;
- 15- Copia simple de Informe Médico Psiquiátrico de don Carlos Rojas Villagrán de fecha 21 de agosto del año 2019;
- 16- Copia simple de Informe Médico Psiquiátrico de doña Mariana Rojas Arqueros de fecha 1 de agosto del año 2019;
- 17- Copia simple de Informe Médico Psiquiátrico de Eduardo Díaz Maureira de fecha 14 de agosto de 2019;
- 18- Copia simple de certificado suscrito por la Secretaría Ejecutiva de la Fundación Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia de fecha 29 de 2019;
- 19- Copia simple de Informe de daños de don Alejandro Fabres suscrito por PRAIS;



«RIT»

Foja: 1

- 20- Certificado de nacimiento de doña Mariana Andrea Rojas Arqueros, Eduardo Enrique Díaz Maureira y Alejandro Felipe Fabres Fabres;
- 21- Copia simple de Sobreseimiento de don José Claudio Hernán Díaz Riveros de fecha 2 de julio de 1984;
- 22- Copia de sentencia del 9° Juzgado Civil de Santiago en causa Rol C-34326-2019;
- 23- Copia simple de análisis jurisprudenciales, y;
- 24- Sentencia en causa Rol C-21-2017, del Primer Juzgado Civil de Valdivia.

**Séptimo.** Que, además la parte demandante presentó a declarar en calidad de testigos, en audiencia de fecha 03 de enero de 2020, a las siguientes personas:

**-Doña Tania Elena San Martín Pérez,** quien declara respecto de Alejandro Fabres, que fue detenida conjuntamente con el demandante, siendo ambos menores de edad. Señala que recibiendo golpes que le generaron daños físicos en la columna al actor. Luego los pasearon por Santiago durante unas horas hasta llevarlos a distintas comisarías, pasando al día siguiente a la Fiscalía Militar. Todo ello generó daños psicológicos irreversibles.

Agrega que tiene conocimiento de lo ocurrido a doña Mariana Rojas y Carlos Rojas, quienes sufrieron daño moral.

**-Don Adolfo Camilo Ortega Franz,** declara respecto de Ingrid Telias, a quien conoce porque trabajaba con su padre, declarando que ésta fue detenida un domingo, a lo que siguieron varios días en que desconocieron su paradero. Agrega que la tuvieron encerrada en el Diario Clarín sufriendo torturas, golpes, vejaciones sexuales, golpes eléctricos en los genitales y partes sensibles, amenazas de muerte a ella y su familia y promesas de apremio en caso de no delatar a sus compañeros. Posteriormente fue trasladada a Tres Álamos donde sufrió apremios y





«RIT»

Foja: 1

estuvo incomunicada con amenazas de fusilamiento falsas, hasta que la liberaron en un sector alejado de la ciudad con los ojos vendados a la espera de ser fusilada. Agrega que los hechos provocaron en la demandante un daño moral imborrable, quien pasó de ser una persona desenvuelta y con liderazgo a ser una persona introvertida, con temor a salir a la calle y secuelas físicas como la psoriasis.

**-Don Carlos Ramón Farías Canales,** declara haber sido detenido con el demandante, don Eduardo Díaz, el año 1973, quien tenía 16 años, en General Mackenna, dentro de una celda de 6 x 6, donde había más de 40 personas. Señala que en dos ocasiones, tras los interrogatorios, vio regresar al demandante llorando, con moretones en la cara y el pecho. Añade que estos sucesos generan mucho daño físico y psicológico.

**-Don Heriberto Ismael Becerra Valdés,** declara conocer los hechos que dicen relación a lo sucedido a los demandantes por el trabajo que realizaba. Confirma que los hechos dejan profundos daños psicológicos

**Octavo.** Que la parte demandada rindió acompañó el Oficio Ord. N° 58678/2019, de 26 de abril de 2019 como prueba documental.

**Noveno.** Que atendido el mérito de los antecedentes que constan en autos, esto es lo expresado por ambas partes en la etapa de discusión y la prueba rendida, se tienen por acreditados lo siguientes hechos:

1° Que don Alejandro Felipe Fabres Fabres fue detenido el 16 de octubre de 1986, con sólo 16 años, en el contexto de una manifestación estudiantil. Fue trasladado a la 34° Comisaría de Santiago donde fue golpeado y torturado. Luego fue trasladado a la cárcel de menores de Puente Alto, donde recibió amenazas.

Finalmente fue puesto a disposición de la Tercera Fiscalía Militar para ser puesto en libertad.

2° Que don Carlos Segundo Rojas Villagrán fue detenido el 18 de octubre de 1984 en su casa ubicada en Neptuno 397, comuna de Lo Prado, tras ser allanada por militares, carabineros y civiles, donde fue torturado y amenazado con violar a su esposa e hijas.



«RIT»

Foja: 1

Posteriormente fue trasladado a la 26° Comisaría de Santiago, donde le propinaron golpes y corriente eléctrica.

3° Que doña Mariana Rojas Arqueros, el 18 de octubre de 1984, con 13 años de edad, fue amenazada con ser violada por militares, carabineros y civiles que allanaron su casa y le rompieron sus vestiduras, mientras le propinaban golpes a su padre Carlos Rojas Villagrán.

Posteriormente trasladaron a toda su familia a la 26° Comisaría de Santiago, dejándola sola con su sobrino pequeño y su hermano pequeño, mientras un hombre los obligaba a permanecer quietos.

4° Que don Eduardo Enrique Díaz Maureira fue detenido el 13 de diciembre de 1973, con sólo 16 años de edad. Luego fue conducido al Cuartel General de Investigaciones, donde recibió golpes, permaneciendo encerrado alrededor de 20 días.

5° Que doña Ingrid del Carmen Telías Flores fue detenida el 27 de julio de 1975 por el Servicio de Inteligencia de Carabineros y fue conducida a las dependencias del diario El Clarín, donde fue sometida a interrogatorios y golpes de corriente en sus genitales, dedo y muñeca.

Posteriormente fue trasladarla a Cuatro Álamos, donde continuaron las torturas de simulacros de fusilamiento, golpes y aplicación de electricidad sobre un catre a cuerpo desnudo y mojado.

Finalmente fue liberada con los ojos vendados y a la espera de ser fusilada.

6° Que don José Claudio Hernán Díaz Riveros fue detenido el año 1982, y trasladado a la cárcel de Rancagua, acusado de extraer material explosivo. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Linares y luego llevado al Regimiento Escuela de Artillería de Linares, donde fue sometido a torturas y amenazas.

A los seis meses fue dejado en libertad bajo firma y el 2 de julio de 1984 fue sobreseído en la Causa Rol 184-83 del Tercer Juzgado Militar, lo que fue confirmado por la Corte Marcial el año 1990.



«RIT»

Foja: 1

7° Queda asentado además que todos los actores se encuentra calificados como víctimas en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, establecida por Decreto Supremo N° 1.040, del año 2003, del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I.

**I.- En cuanto a la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco.**

**Décimo.** Que las disposiciones legales invocadas por el Fisco, entre ellas las Leyes N° 19.123 ,19.992 y 20.874 como fundamento de su alegación en cuanto a que los perjuicios reclamados ya han sido reparados, denominadas también “Leyes de Reparación”, si bien corresponden a un reconocimiento del Estado de su deber de reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y a sus familiares directos, en ningún sentido las reparaciones materiales y simbólicas en ellas contenidas, a juicio de esta sentenciadora, resultan incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios, de considerarse que concurren los requisitos para ello.

A mayor abundamiento que de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 19.123, se establece una pensión mensual de reparación en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de la violencia política, que no contempla la limitación pretendida por la demandada, debiendo tenerse presente, a mayor abundamiento, que la propia ley, también conocida como Ley de Reparación, ha ido ampliando no sólo los beneficios otorgados sino también la calidad de beneficiarios a lo largo del tiempo.

En el mismo sentido, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor



«RIT»

Foja: 1

razón resulta compatible -a juicio de esta magistratura- con una reparación meramente simbólica.

Además, la indicada normativa y cuerpos legales en general citados tampoco establecen renuncia, prohibición o incompatibilidad alguna con una eventual reparación monetaria que tenga por objeto la reparación integral del daño padecido, razones todas ellas que en consecuencia llevan a esta magistratura a rechazar la alegada excepción de reparación.

**En cuanto a la excepción de prescripción opuesta por el Fisco.**

**Undécimo.** Que de forma previa a entrar al fondo del asunto que ha sido sometido a conocimiento de esta magistratura, cabe pronunciarse sobre la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco.

**Duodécimo.** Que en este sentido cabe reiterar que la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad.

**Décimo tercero.** Que al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso significaría una negación de Derechos Fundamentales, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.



Foja: 1

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que: *“en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados,...si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna”* (Rol CS 3573-2012).

Todas estas reflexiones conducen en consecuencia al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

### **III. En cuanto a la pretensión indemnizatoria.**

**Décimo cuarto.** Que corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada y que conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención, privación de libertad, torturas y actos violentos practicados a doña Mariana Andrea Rojas Arqueros, don José Claudio Hernán Díaz Riveros, don Eduardo Enrique Díaz Maureira, don Carlos Segundo Rojas Villagrán, don Alejandro Felipe Fabres Fabres y doña Ingrid del Carmen Telias Flores, al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado, considerando la normativa aplicable.

Así, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.



De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949.

**Décimo quinto.** Que establecida de forma manifiesta la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor; así el daño moral tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

**Décimo sexto.** Que en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral reclamado, los demandantes presentaron a declarar a los testigos individualizados en un considerando anterior, los que dan cuenta de los trastornos que produjo en su salud, la angustia, pena, fragilidad emocional y activa, estado tensional, frustración, entre otras cuestiones, con motivo de la experiencia de detención, prisión y tortura a la que fueron sometidos.

Ahora bien, no obstante la prueba rendida y analizada precedentemente que resulta satisfactoria para acreditar el daño moral alegado, la existencia de dicho daño moral en este caso incluso pudo presumirse atendida la gravedad del hecho ilícito, sus consecuencias y las circunstancias que lo rodearon.

**Décimo séptimo.** Que en la determinación del quantum de la indemnización, cabe señalar que en la especie se configura el daño moral padecido por el demandante por los motivos expresados en el considerando anterior, razón por la que pese a lo complejo de calcular y cuantificar este tipo de daño, esta Juez lo regula prudencialmente en la cantidad de \$ 50.000.000 para cada uno de los demandantes.

**Décimo octavo.** Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre



«RIT»

Foja: 1

la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada.

**Décimo noveno.** Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistratura que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 , 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I.- Se **rechazan las excepciones de reparación y de prescripción** deducidas por el demandado.

II.- Se **acoge**, parcialmente, la demanda deducida a lo principal del escrito de fecha 12 de febrero de 2019 y, en consecuencia, se ordena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de \$ 50.000.000 ( cincuenta millones) a cada uno de los demandantes, esto es, para doña Mariana Andrea Rojas Arqueros, José Claudio Hernán Díaz Riveros, don Eduardo Enrique Díaz Maureira, don Carlos Segundo Rojas Villagrán, Alejandro Felipe Fabres Fabres y doña Ingrid del Carmen Telias Flores, más los reajustes e intereses consignados anteriormente.

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

**Rol N° C-5318-2019.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiseis de Mayo de dos mil veinte.**

